

# El proceso de inclusión laboral de los desmovilizados en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana

The labor inclusion processes of demobilized people in Medellín city and its metropolitan area

O processo de inclusão laboral dos desmobilizados na cidade de Medellín e sua Área Metropolitana

Jair Eduardo Restrepo Pineda\*  
Marisol Giraldo Arboleda \*\*  
Olga Iris Buenaventura Iburguen \*\*\*  
Leidy Jhobana Amariles Calderón \*\*\*\*

Corporación Universitaria minuto de Dios

## Resumen

Se realiza un análisis sobre los procesos de inclusión laboral de las personas desmovilizadas

Fecha de recepción del artículo: 15 de junio de 2017

Fecha de aceptación del artículo: 5 de Septiembre de 2017

DOI: <http://dx.doi.org/10.22335/rict.v9i2.477>

\*El artículo es resultado del proyecto "Procesos de inclusión laboral de las personas desmovilizadas del Conflicto armado colombiano en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana"

\* Doctor en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales, Máster en Cooperación al Desarrollo, Administrador del Medio Ambiente. Filiación: Docente e Investigador del Programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Sede Bello. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-3959-4550>

\*\* Trabajo social. Filiación: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Email: [marisolgiraldo@gmail.com](mailto:marisolgiraldo@gmail.com). Orcid: <http://orcid.org/0000-0001-6883-4069>

\*\*\* Trabajo social. Filiación: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Email: [irisbuenaventura@hotmail.com](mailto:irisbuenaventura@hotmail.com). Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-2937-616X>

\*\*\*\* Trabajo social. Filiación: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Email: [lamarilesca@uniminuto.edu.co](mailto:lamarilesca@uniminuto.edu.co). Orcid: <http://orcid.org/0000-0001-6791-4593>

en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, la cual concentra el mayor número de desmovilizados del país, con cerca de 5433 que se han reintegrado a la sociedad entre los años 2006 a 2016, según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Se evidenció que existen diversas barreras sociales, culturales y económicas que limitan el acceso al empleo por parte de los desmovilizados, entre ellas la estigmatización social, la baja oferta laboral, el desconocimiento de las habilidades del desmovilizado y las presiones de grupos al margen de la ley que pueden ocasionar el retorno de estas personas a los grupos armados ilegales.

**Palabras Clave:** Oportunidades de empleo; Conflicto armado; Desmovilizados; Integración social.

## Abstract

An analysis is carried out on the labor inclusion processes of demobilized people in Medellín city and its metropolitan area, which concentrates the largest number of demobilized in the country, with about 5433 that have been reinstated to society between the years 2006 to 2016, according to data obtained from the Colombian Agency for the reintegration (ACR). It is a fact that there are various social, cultural and economic barriers that restrict access to employment by the demobilized, among these barriers we found social stigmatization, the low job offer, the lack of knowledge of the demobilized work-skills and the pressure put onto demobilized groups from outside gangs who became an important cause of return from these people to illegal armed groups.

**Keywords:** Employment opportunities; War; Demobilized; Social integration.

## Resumo

A pesquisa é enquadrada em uma abordagem explicativa quantitativa, cujo objetivo era analisar um modelo para descrever a taxa de desemprego condicionada à probabilidade de passar de um estado ocupacional para um estado de desemprego, diante de diferentes características do perfil de graduação dos indivíduos das universidades do norte de Santander. Dentro deste quadro de referência, foram estudadas as mudanças no status do trabalho nos graduados para 2014 e 2016; através de amostragem de conglomerados de vários estágios. Resultados: altos valores preditivos e ajustes adequados caracterizaram os modelos de tipo logit ajustados. Através de seus coeficientes, foi obtida uma medida das diferenças de inércia do trabalho entre diferentes programas acadêmicos. O modelo de logit ajustado foi um ótimo modelo para medir a taxa de desemprego em profissionais.

**Palavras-chave:** Oportunidades de emprego; Guerra; Desmobilizado; Integração social

## Introducción

En la reintegración social de las personas desmovilizadas se destacan factores que dificultan el acceso a la empleabilidad correspondientes a la responsabilidad que deben tener las diferentes entidades del Estado y la sociedad en general, en este sentido Castillo y Moreno sostienen que "algo claro surge y es la necesidad de mayor corresponsabilidad de todos los actores, pues solo de esa manera puede ser posible mayor cumplimiento en términos de reintegración económica" (Castillo y Moreno, 2013, p.87).

Por lo tanto, es necesario involucrar a las empresas privadas, a las instituciones del Estado y a todos los actores sociales para lograr procesos de reinserción integrales y exitosos, fundamentales para la reconciliación nacional. Dichos procesos deben preocuparse de todos los ámbitos de la vida del individuo, en este sentido "la reinserción tiene que ver con múltiples escenarios tales como la incorporación a una actividad laboral y económica" (López, 1993, p.15).

Pese a los avances que se han realizado por parte de los equipos interdisciplinarios de las diferentes organizaciones públicas que tienen la labor de viabilizar la reinserción de los desmovilizados, aún persisten dificultades que condicionan la accesibilidad a un trabajo digno y equitativo. Tal situación se manifiesta en las limitaciones para el acceso a empleos formales y la falta de oportunidades laborales, determinadas por la baja cualificación del desmovilizado y la alta competitividad en el mercado laboral; poniendo en desventaja a los desmovilizados con relación al resto de la población, algunos autores sostienen que:

Cuando miles de combatientes se desmovilizan en una economía desgastada por el conflicto y con sectores privados poco desarrollados o considerablemente afectados, se presenta una escasez de oferta de trabajos en el mercado laboral. En este escenario, al no tener mayores oportunidades de integración en tales espacios laborales, los participantes presentan una alta

vulnerabilidad económica (Herrera y González, 2013, p.281).

Asimismo, es importante destacar que algunas de las dificultades en la reintegración económica de la población desmovilizada se han debido al modelo neoliberal aplicado al proceso, el cual centra el interés en la empresa más que en la persona, dificultando reconocer las características de la población desmovilizada y los ambientes a los que se vinculan durante el proceso de reincorporación, al respecto, Throssell indica:

La estrategia de reintegración económica en Colombia fue inicialmente diseñada con un idealismo neoliberal, uno que no correspondía con la realidad del país. Hubo un enfoque en emprendimiento, que a pesar de varios intentos para hacerlo funcionar, no ofrecía un ingreso decente ni seguridad económica para un segmento sustancial de la población desmovilizada. (Throssell, 2013, p.211).

Es necesario recalcar el compromiso que debe adquirir el Estado con la realización de los procesos de reintegración a la sociedad civil de los excombatientes. Además, se debe tener en cuenta que algunos de ellos no han accedido a procesos de formación académica y no poseen experiencia laboral, factores que no les permiten integrarse fácilmente a la sociedad. Como respuesta a esta situación el Estado colombiano ha creado programas como el de Paz y Reconciliación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), a través del cual se capacita a estas personas de manera tal que les permitan vincularse laboralmente y lograr obtener una estabilidad económica.

La reintegración social de los desmovilizados se inicia con una serie de procesos que es necesario considerar, el primero de ellos es el desarme, el cual es entendido como:

La recolección, documentación, control y disposición de todas las armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas de los combatientes, y a menudo también de la población civil. El desarme también incluye el desarrollo de programas responsables de gestión de armas. Por su parte, la Reinserción: es la

asistencia ofrecida a los ex combatientes durante la desmovilización, pero antes de un proceso de reintegración más largo y la Reintegración, la cual es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus civil y obtienen un empleo e ingreso sostenibles. Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP, 2013, pp.14-15).

En el momento en el cual los desmovilizados inician su vinculación a la legalidad se debe fomentar la participación de esta población en actividades políticas, sociales y culturales para su bienestar, además, se deben abordar temáticas que les permitan adaptarse a la vida civil, creando nuevas estrategias de vida, es así como

La reintegración del excombatiente es el inicio de un proceso de restauración de este con su familia, redes sociales y el apoyo que requiere para volver a la sociedad como miembro de ella con derechos y deberes; el éxito de su reintegración dependerá de las habilidades del individuo para hacerse partícipe en los sistemas de relación que caracterizan a la sociedad (Velasco y Londoño, 2009, p.18).

La desmovilización de excombatientes es un aspecto que requiere de mayor interés por parte del Estado colombiano, donde la participación de los diferentes actores sociales pueda aportar desde diferentes perspectivas a la integración social de dicha población. Así mismo, es importante reconocer la trascendencia que tiene la posibilidad de que las personas que han vivido durante largos años al margen de la ley puedan reinsertarse a la vida civil, lo cual invita a un compromiso para la creación de programas pertinentes, donde se vincule a toda la sociedad proporcionando garantías para la permanencia de los desmovilizados en ella, en este sentido

El gobierno debe cuidar más del proceso de reinsertión y vincular más decididamente a ella a los gremios, las organizaciones sociales, los partidos políticos, las instituciones estatales, los medios de comunicación, y al ciudadano común, mostrando que ella compete no solamente al Estado y a las organizaciones desmovilizadas. Hay una queja generalizada por el bajo perfil de la

reinserción. Se hace necesario venderle a la opinión el proceso de reinserción, manejarlo simbólicamente, mostrar lo positivo de él, y hacer que la gente lo asocie a un proceso mayor y mucho más importante: el de la reconciliación nacional. (López, 1993, p.28).

Sin embargo, la inestabilidad económica de los desmovilizados como producto en muchos casos de la ineficiencia de los programas estatales que les impide garantizar su estabilidad laboral y la presión constante de los grupos al margen de la ley podría impulsarlos a retornar las actividades ilegales. En este sentido, Nussio sostiene que "hay rumores de que los pagos en las estructuras ilegales son mayores a lo que las personas desmovilizadas reciben de parte del programa de reintegración, es por esto que la gente desmovilizada se ve atraída económicamente hacia estas estructuras ilegales" (Nussio 2011, p.594).

Por tanto, se considera trascendental la participación de los diferentes actores del ámbito nacional e internacional, dado que las consecuencias de la guerra trascienden fronteras, así mismo repercuten en todas las dimensiones del país, siendo necesario que

Los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional" (Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, 2008, p.7).

Cabe resaltar la trascendencia de los procesos de reintegración, ya que su acción colectiva aumenta las posibilidades de interacción con la comunidad, donde los beneficios sean generalizados para aumentar la aceptación de la población desmovilizada dentro de la sociedad, Astrom considera que

El programa de reintegración puede entenderse como un puente que permite el tránsito de los combatientes de la guerra a su incorporación en

la vida civil, y es necesario para evitar la reincidencia y conseguir la estabilidad en la legalidad. Antes el enfoque de los programas de reintegración era individual, se concentraba en cada excombatiente, pero ahora incluye también trabajo colectivo con las comunidades, teniendo como eje central la idea de que si la sociedad civil no recibe beneficios puede reavivarse el conflicto (Astrom, 2016, p.17).

En síntesis, se hace necesaria la corresponsabilidad de los distintos actores sociales como agentes indispensables en los procesos de reintegración de las personas desmovilizadas, posibilitándoles la inclusión social y donde el factor económico se convierte en la base de su estabilidad y bienestar. En esta labor, el compromiso de empresas tanto públicas como privadas contribuye a tal propósito, aunque se reconoce que la fragilidad del mercado laboral nacional sigue siendo un factor fundamental para asegurar un proceso de reincorporación integral. Por su parte, el Estado debe adquirir mayor compromiso como garante en este proceso, que deberá incluir dentro de sus programas y proyectos un componente de sensibilización y educación que disminuya el estigma y la discriminación social hacia estas personas, promoviendo su inclusión, además de destacar el beneficio que generan este tipo de procesos para la sociedad en general, en el marco de la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.

### Metodología

La metodología utilizada en la investigación fue cualitativa de tipo descriptiva y analítica. La población entrevistada debía cumplir una serie de criterios de inclusión, entre ellos: personas desmovilizadas de grupos al margen de la ley que se encontraran laborando en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana en el momento de la entrevista, se incluyeron personas de ambos sexos y solamente mayores de edad. Además, se entrevistaron personas responsables de realizar el acompañamiento en las diferentes empresas que vinculaban a la población desmovilizada, y se entrevistó a un microempresario.

La entrevista estaba estructurada en cuatro apartados, el primero de ellos indagaba sobre los datos sociodemográficos de las personas desmovilizadas, el segundo sobre los aspectos referidos al proceso de desmovilización, un tercer componente cuestionaba sobre la incorporación a los programas de reinserción social y finalmente, un cuarto apartado sobre las cuestiones referidas a la inserción laboral.

En total, se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas, seis de ellas dirigidas a los desmovilizados, todos ellos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una entrevista al coordinador de emprendimiento del Programa Paz y Reconciliación que hace acompañamiento a la población en la ciudad de Medellín y finalmente una entrevista a un microempresario.

El análisis de la información se realizó con la ayuda del software Atlas.TI, el cual permitió establecer una relación entre los conceptos teóricos y los datos empíricos para su posterior interpretación y análisis. Es importante resaltar la dificultad que se presentó para acceder a un número mayor de entrevistados, debido a razones de seguridad, ya que la información de los desmovilizados es restringida para velar por

su seguridad. Así mismo, no fue posible tener acceso a población femenina dado el bajo porcentaje de mujeres desmovilizadas. Cabe mencionar, finalmente que la identidad de los participantes se mantuvo en anonimato a través de la utilización de seudónimos y cada uno de los entrevistados firmó un consentimiento informado para participar en la investigación.

### Resultados

Los desmovilizados entrevistados indicaron que al momento de ingresar al grupo ilegal tenían un nivel educativo que no sobrepasaba el sexto grado, ya que se incorporaron a estos a edades tempranas, como en el caso de un joven que se integró siendo menor de edad, exactamente a los trece años. De ahí que la escolaridad de los desmovilizados no superaba la educación media, sin embargo al iniciar el proceso de reintegración algunos lograron alcanzar un nivel educativo correspondiente a tecnólogo, en áreas como la regencia de farmacia y la seguridad industrial, mientras que otros no lograron concluir el bachillerato. Por tanto, el nivel escolar se constituye en una barrera considerable para acceder al mercado laboral en el marco de la legalidad, tal como lo sostiene el documento Conpes:

Tabla 1. Descripción de las características sociodemográficas de la población desmovilizada

Nombre	Roles	No. Hijos	Edad	Sexo	Estado civil	Nivel académico	Organización familiar
Simón	Padre	4	44	Varón	Unión libre	7 <sup>o</sup>	Familia extensa
Marcos	No	0	35	Varón	Soltero	Tecnólogo	Familia monoparental
David	No	0	36	Varón	Soltero	Bachiller	Familia nuclear
Andrés	Padre	1	30	Varón	Unión libre	10 <sup>o</sup>	Familia nuclear
Alexander	Padre	1	32	Varón	Separado	Técnico	Familia Monoparental
Moisés	Padre	2	38	Varón	Casado	7 <sup>o</sup>	Familia nuclear

Fuente: Autores

Los desmovilizados entrevistados indicaron que al momento de ingresar al grupo ilegal tenían un

nivel educativo que no sobrepasaba el sexto grado, ya que se incorporaron a estos a edades

tempranas, como en el caso de un joven que se integró siendo menor de edad, exactamente a los trece años. De ahí que la escolaridad de los desmovilizados no superaba la educación media, sin embargo al iniciar el proceso de reintegración algunos lograron alcanzar un nivel educativo correspondiente a tecnólogo, en áreas como la regencia de farmacia y la seguridad industrial, mientras que otros no lograron concluir el bachillerato. Por tanto, el nivel escolar se constituye en una barrera considerable para acceder al mercado laboral en el marco de la legalidad, tal como lo sostiene el documento Conpes:

Gran parte de la población en proceso de reintegración abandonó las aulas a muy temprana edad y nunca volvió a ingresar a un proceso de formación académica, por lo cual aplica a la mayoría de los casos al concepto de analfabetas funcionales. En general, los bajos niveles educativos constituyen una característica fundamental de esta población. (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 2008, p.21).

Los entrevistados hacen parte de la población económicamente activa, ya que estos se encuentran entre los 30 y 44 años de edad, lo cual corresponde con los datos que maneja el gobierno colombiano, en este sentido

La mayoría de las personas en proceso de reintegración se encuentran en los rangos de edad económicamente activa. El 63.8% de los adultos desmovilizados registra edades entre los 26 y 40 años; el 26.6% se encuentra entre 18 y 26 años. El restante 9.6% corresponde a mayores de 40 años. (CONPES, 2008, p.15).

Con relación al sexo, el porcentaje de hombres que se han desmovilizado corresponde al 91%, frente al 9% que son mujeres según el informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 2008, p.15), es así como el trabajo de campo realizado para este artículo puede dar cuenta de ello, ya que las seis entrevistas realizadas corresponden a varones, siendo difícil contactar a alguna mujer.

Por otra parte, los desmovilizados entrevistados ingresaron mayoritariamente de manera

voluntaria a los grupos ilegales, solo dos de ellos fueron incorporados de manera forzada. Con referencia a su desmovilización todos lo hicieron colectivamente, siendo un proceso estipulado en los programas de reintegración del gobierno nacional, tal como lo sostiene Mejía, "en Colombia el mayor porcentaje de los excombatientes de las AUC se desarmaron de manera colectiva" (Mejía, 2014, pp.59-60) acogiéndose al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración Paz y Reconciliación, y al Acuerdo 71 de 2006.

En cuanto al contexto social del cual provenían los desmovilizados, estos ponen de manifiesto que vivían en entornos vulnerables con grandes desigualdades sociales y abandono estatal. Donde existía una presencia constante de grupos ilegales quienes suplantaban en algunas ocasiones la presencia del Estado; debido a estas circunstancias algunos entrevistados tomaron la decisión de ingresar a estos grupos, pero sin ningún tipo de identidad ideológica con respecto a este, así se evidencia en una de las entrevistas:

"Antes de ingresar en los grupos armados, hice parte de una de las catástrofes más grandes que ha sucedido en la ciudad de Medellín, la catástrofe de Villatina; donde ahí, quedamos huérfanos, quedamos solos y a nosotros no nos ampara un Bienestar Familiar ni un Estado, sino que lastimosamente nos amparan los grupos armados, que tomaron ese rol con nosotros como si fueran los papás que se nos habían muerto en la catástrofe de Villatina; entonces, por instinto de supervivencia fue que entramos a los grupos" (Simón, 44 años).

En este sentido, Mejía (2014) sostiene que

Como parte del análisis realizado en el campo de los estudios de DDR existe una clara tendencia a abordar aquellos factores que inciden tanto en la formación de los grupos armados ilegales como en su posterior desarrollo y desarticulación. Frente a este tema, la literatura muestra análisis de elementos como la pobreza, la destrucción de las estructuras sociales, la ausencia de oportunidades, la proliferación de la

ilegalidad, el narcotráfico, el abandono estatal (Mejía, 2014, pp.39-40).

Esta situación pone en evidencia como los factores sociales y económicos de la población han condicionado en buena medida el surgimiento y consolidación de los grupos armados al margen de la ley, de manera tal que la desprotección por parte del Estado colombiano ha motivado en algunos casos la vinculación de diversas personas a las filas de estos grupos como única forma de subsistencia.

Con relación al grupo de procedencia, todos los desmovilizados que fueron entrevistados hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque la investigación estaba abierta a personas procedentes de cualquier grupo armado al margen de la ley, solo se pudieron contactar exmilitantes de dicho grupo. Esta situación posiblemente se dio por dos razones fundamentales; la primera de ellas que la población desmovilizada de los diferentes grupos guerrilleros es restringida por razones de seguridad, pues, en su mayoría prefieren estar en el anonimato y las bases de datos no son de fácil acceso. En segunda medida, al hecho de que en la ciudad de Medellín se produjo la mayor desmovilización del país correspondiente a combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Además, si se tienen en cuenta las estadísticas sobre desmovilización en Colombia, se puede entender que existe una mayor posibilidad de contactar con personas provenientes de las AUC que de otros grupos al margen de la ley, ya que entre 1990 y 2016 se han desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 35442 militantes, seguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con 18616 y en tercer lugar el Ejército Popular de Liberación (EPL) con 2000 (El Tiempo, 2016).

En cuanto al lugar de residencia de los entrevistados, estos residen en la ciudad de Medellín, pero es importante aclarar que algunos nacieron en otros municipios del departamento de Antioquia y en otros departamentos de Colombia.

Finalmente, es importante mencionar el tiempo de permanencia de los entrevistados en el grupo armado, el cual está entre los dos y los veinte años, periodo de tiempo en el cual los desmovilizados desempeñaron diferentes actividades, generalmente como soldados rasos, sin embargo, dos de los entrevistados fueron comandantes de frente, lo que les permitió recorrer varias zonas del país durante su permanencia en la ilegalidad. Por otra parte, los entrevistados expresaron su temor de regresar a la vida civil, debido a la incertidumbre que les genera el proceso de reintegración, aunque la legislación establece que este proceso es integral, según el Decreto 3043

Estos procesos contemplan de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas en la comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad en general en su proceso de inclusión a la vida civil y legal del país. (Decreto 3043, 2006 Parágrafo 1: 2).

### **Factores sociales y culturales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada**

Dentro de los factores identificados que influyen de manera directa en los procesos de inclusión laboral de la población desmovilizada están los sociales y culturales, estos determinan la manera como la sociedad se convierte en parte fundamental para el éxito o fracaso del proceso de reintegración del desmovilizado, ya sea con su aceptación o rechazo.

Es relevante indicar, que algunos de los desmovilizados no buscan oportunidades laborales debido al temor que sienten por el señalamiento social, razón que los obliga a permanecer invisibilizados, de esta manera "los excombatientes perciben un amplio rechazo y estigmatización de la sociedad en general, que es un factor agravante a sus problemas de seguridad y desempleo" (IEGAP, 2013, p.44), en palabras de uno de los entrevistados:

"La gente nos veía como la escoria de la sociedad, nosotros donde entrábamos a estudiar

a la gente de daba temor, y se salía la gente, o sea, el rechazo era impresionante” (Andrés, 30 años).

Al mismo tiempo, se presenta un factor de riesgo adicional referido al contexto social donde residen los desmovilizados, ya que persiste la presencia de grupos ilegales en las zonas donde estos habitan, ya sean derivados del grupo al margen de la ley al que pertenecían o de otros grupos que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Esta situación ha originado que la comunidad se abstenga de acogerlos e integrarlos socialmente, debido al temor que les genera las posibles represalias que puedan tomar los militantes de estas organizaciones. Este mismo escenario ya ha sido evidenciado en otros contextos:

Por parte de las comunidades receptoras; el miedo y temor que éstas puedan tener, dado que muchos desmovilizados cometieron y participaron en violaciones a los DDHH y al DIH, o por la posibilidad que pueda haber represalias por parte de GAI activos por el hecho de acogerlos. (CONPES, 2008, p.23).

Resulta claro que la inclusión laboral se convierte en un aspecto ineludible para la transformación social, pensado como un aporte para disminuir las problemáticas existentes en los contextos donde interactúa la población desmovilizada, reconociendo que en dichos espacios prevalece la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Es así como, a través de los procesos de inclusión laboral en que los desmovilizados participan les permiten la construcción de sus proyectos de vida, logrando su adaptación a los entornos laborales sin tener que reincidir en actividades ilegales. Sin embargo, los factores sociales vinculados al estigma y la discriminación, así como a la influencia de contextos inseguros, pueden condicionar el éxito de dicho proceso.

Por tanto, este tipo de acciones no solo debe involucrar a la persona desmovilizada, sino que debe incluir de manera integral a toda la sociedad a través de procesos de sensibilización y educación que permitan eliminar los imaginarios

y prejuicios sociales, además de proporcionar entornos seguros para los desmovilizados.

### **Factores personales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada**

Uno de los impedimentos para lograr una efectiva inclusión laboral de la población desmovilizada es la falta de experiencia de estos y su dificultad para interactuar en la sociedad. Situaciones que crean tensión en el proceso de adaptación al medio laboral, el cual prioriza acatar normas, cumplimiento de horarios y responsabilidades, para los cuales en algunos casos los desmovilizados no están preparados. Este escenario evidencia la necesidad de realizar procesos flexibles por parte de las empresas, pues resulta inapropiado comparar la manera en la cual se desenvuelve socialmente un individuo que ha estado permanentemente involucrado en el conflicto armado, con la de quienes no han vivido la guerra de manera directa. Esta situación es reconocida por parte del gobierno colombiano;

En su gran mayoría, los desmovilizados poseen atributos psicosociales y valores que limitan su posibilidad de interacción social; en otras palabras, no se encuentran preparados para vivir dentro de un conjunto de reglas sociales en coordinación con el presupuesto de la legalidad (CONPES, 2008, p.20).

Es importante subrayar, la esperanza que les genera la oportunidad de encontrar un trabajo que les garantice estabilidad económica y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, puesto que ello es sinónimo de tranquilidad para permanecer en la legalidad. En este sentido, “la experiencia vivida por algunos desmovilizados frente a su regreso a la sociedad civil se llena de expectativas, pues espera que ese regreso a la comunidad, le dé garantías individuales y laborales que permitan una sobrevivencia digna” (Vélez, 2012, p.63).

De hecho, la dificultad para hallar opciones laborales les incita a retornar a los grupos



ilegales, tal como se evidencia en las entrevistas realizadas, donde algunos declararon haber recibido ofertas por parte de uno o varios grupos ilegales, quienes les prometían la posibilidad de recibir una considerable remuneración económica dada la experiencia en dichas actividades al margen de la ley. Así mismo, los testimonios hicieron mención de compañeros que ante la imposibilidad para obtener empleo ingresaron nuevamente a estos grupos. En palabras de uno de los entrevistados:

“¡Ya nos pasó!, ¡a nosotros ya nos ha tocado, imagínese que yo soy desmovilizado del 2003 y del 2003 a la fecha han pasado 5 grupos armados!” (Simón, 44 años).

Sin embargo, es necesario considerar la nueva visión del mundo que adquieren los desmovilizados en la legalidad, puesto que las motivaciones y las expectativas personales con las cuales estos llegan al proceso resultan ser muy positivas, pero al enfrentarse a un sinnúmero de problemas pueden originar el cambio en su manera de pensar, la cual cierra o amplía el horizonte frente a su reintegración a la vida civil. Por tanto, todos los procesos de reintegración deben incorporar un componente psico-social que les aliente a perseverar pese a las dificultades, es decir, “el asumir la calidad de vida como la estabilidad y tranquilidad que se genera cuando se hace parte una nueva vida” (Caballero y Villa, 2014, pp.26-27). En palabras de los entrevistados:

“Soy un persona totalmente diferente, ya no me importa nada de armas, ya no quiero saber nada de eso” (Marcos, 35 años).

“Mi finalidad es sembrar semillas para las nuevas generaciones, estoy trabajando en el desarrollo directo de la paz, construyo con mucho amor, compromiso, pasión y entrega” (Simón, 44 años).

De manera general, se evidencian tanto aspectos positivos como negativos propios de los desmovilizados que influyen en sus procesos de integración laboral, por una parte aquellos que se refieren al acatamiento de normas y reglas sociales que los limitarían para acceder al mercado laboral, pero en contraposición a esto se

encuentra su disposición a mejorar su calidad de vida, asumiendo nuevos retos en la búsqueda de la estabilidad y la tranquilidad personal y familiar.

### **Factores económicos que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada**

Encontrar empleo es una de las mayores expectativas que tienen las personas en proceso de reintegración, sin embargo, se convierte en un obstáculo que deben enfrentar; como resultado de la ausencia del compromiso estatal frente a la sensibilización del sector empresarial, y debido a la inestabilidad del mercado laboral en Colombia, cuya tasa de desempleo se situó en junio del 2017 en el 8,7% según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el caso de Medellín y su Área Metropolitana esta cifra se ubicó en el 10,0%.

Para hacer frente a esta situación, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha generado una estrategia mediante la cual busca fomentar el emprendimiento de las personas desmovilizadas. Dicho programa consiste en la entrega de un capital semilla para la implementación de proyectos productivos para aquellos desmovilizados que tienen la visión de emprendimiento, sin embargo, los beneficiarios de este programa manifiestan que después de dicha entrega el acompañamiento por parte de la ACR no es constante, lo que dificulta el éxito de los proyectos.

Por otra parte, se hace evidente que existe un enfoque que no responde a los intereses de los beneficiarios del programa de inclusión laboral de la ACR, ya que la agencia desarrolla acciones encaminadas a la inclusión laboral individual, mientras que la población desmovilizada manifiesta un interés en participar de forma colectiva en el aspecto. Por tanto, es necesario reconocer y entender las dinámicas de la población desmovilizada de manera tal que se asegure el éxito de su integración al mercado laboral, situación que ya ha sido evidenciada por algunos autores, según los cuales “existen mayores niveles de eficacia respecto a los

procesos de formación para el trabajo y en el sostenimiento de las unidades productivas de los desmovilizados y en menor grado en la vinculación laboral” (Castillo y Moreno, 2013, p.88).

Los entrevistados tienen como principal fuente de ingresos económicos el trabajo independiente, puesto que después de desmovilizarse tardaron varios años para acceder a un empleo formal. Esto debido a los múltiples factores antes mencionados, tales como la inconsistencia del mercado laboral, la falta de experiencia y capacitación, además del estigma y la discriminación al cual se enfrentan estas personas. En palabras de un entrevistado:

“Duré por ahí cinco años, no conseguí trabajo por parte de los programas de la ACR, es independiente que trabajo” (Andrés, 30 años).

Se podría afirmar entonces, que el proceso de reintegración social por el que pasaron los entrevistados no dio los resultados esperados, pues estos se encuentran en la informalidad laboral, situación que los sigue colocando en una alta vulnerabilidad social.

Finalmente, es necesario mencionar que el programa de Paz y Reconciliación de la Agencia Colombiana para la Reintegración realiza el contacto con los empleadores que estén interesados en vincular en su organización a la población desmovilizada, sin embargo, este proceso no se puede quedar solo en el contacto institucional y en la voluntad de los empresarios, sino que debe incluir un componente de educación y sensibilización que vincule a la empresa, la sociedad y el Estado como entes dinamizadores de los procesos de integración e inclusión social de las personas desmovilizadas.

### **Factores institucionales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada**

Según lo manifestado por los entrevistados se ha observado que los programas de reintegración social presentan falencias con relación a los

procesos de desmovilización, lo cual ha impedido que haya una inclusión laboral efectiva; tal situación se ve reflejada en la falta de estrategias de inclusión laboral que identifiquen las necesidades propias de la población desmovilizada, así como la ausencia de compromiso institucional y la incapacidad para dar cobertura ante la magnitud del fenómeno de la desmovilización, entre otros aspectos.

Por tal razón, surge como tarea prioritaria la concertación y comunicación asertiva entre el gobierno y el sector privado que exponga y coordine aspectos fundamentales sobre los compromisos que las empresas deberían adquirir a la hora de contratar esta población; donde la responsabilidad social empresarial juegue un papel importante, conducido más que a una práctica del modelo neoliberal a un compromiso real con la integración de la población para la construcción de la paz.

En este orden de ideas, es importante mencionar la política Nacional de Reintegración Social y Económica, donde el Estado debe fomentar el desarrollo para que la población desmovilizada pueda vincularse de manera integral al campo laboral, sin embargo

Se evidencia un estado que no se constituye en un ente regulador y garante efectivo de la reintegración; en este sentido, deberían realizarse gestiones desde el gobierno central, promoviendo en el país el establecimiento de una política de reintegración que no sea del gobierno de turno, sino una política de excepción pública. (Castillo y Moreno, 2013, p.85).

Por su parte, la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene el compromiso de gestionar los aspectos relacionados con una formación técnica o profesional que posibilite al desmovilizado incorporarse en el mundo laboral. Es decir, materializar en el ámbito local las políticas públicas de manera eficaz y eficiente para el bienestar del desmovilizado. La ACR maneja varias dimensiones para la intervención con las personas desmovilizadas, estas son: personal, seguridad, ciudadanía, educativa, salud, habitabilidad, familiar y productiva.

Dentro de estas dimensiones se destaca la productiva, la cual corresponde al componente de reintegración económica, es en esta etapa cuando los desmovilizados dejan de recibir todas las ayudas del proceso, según explica el coordinador de la ACR:

“Es necesario que por su propia voluntad, y por sus propios medios generen ingresos desde la legalidad, entonces, hay dos líneas en este componente: una que es empleabilidad y otra que es emprendimiento” (Areiza, 2017).

De igual manera, (Areiza 2017) manifiesta que en el componente de emprendimiento de las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), estas tienen por ley el derecho a un Beneficio Inserción Económica (BIE), conocido como capital semilla; por medio del cual se realiza la entrega de ocho millones de pesos a quienes se desmovilizan individualmente, y de dos millones para las personas que se desmovilizan de manera colectiva. El dinero se desembolsa representado en materia prima para el desarrollo de los planes de negocio propuestos por los excombatientes. Sin embargo, y como ya se mencionó, los desmovilizados sostienen que al no existir un proceso continuo de seguimiento y evaluación de los proyectos productivos por parte de la ACR, estos tienden al fracaso.

Por otra parte, existe un componente de empleabilidad, el cual integra toda la parte psicosocial, donde a través de un proceso de acompañamiento profesional se desarrollan acciones denominadas: camino a la empleabilidad. Este proceso se realiza bajo la responsabilidad de psicólogos y reintegradores,

quienes a través de actividades lúdicas ejecutan la simulación de jornadas laborales, talleres de servicio al cliente, actividades sobre el clima organizacional, asesorías sobre el manejo de la hoja de vida, talleres sobre comunicación asertiva, búsqueda efectiva de empleo y finalmente, realizan la simulación de una entrevista, para que los desmovilizados puedan comprender el proceso de selección laboral dentro de las empresas.

Sin embargo, se hace necesario que la Agencia Colombiana para la Reintegración realice una evaluación detallada de los procesos que ha desarrollado hasta el momento que le permitan fortalecer aquellos aspectos que han ocasionado deficiencias en la atención a los desmovilizados. Este proceso de evaluación y mejora les permitirá hacer frente al proceso de reintegración social de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes son los próximos a vincularse a la vida civil, ya que

Con la aprobación del Marco Legal para la Paz se abre una nueva puerta para la desmovilización colectiva de las FARC y el ELN, reto para el cual la ACR debe comenzar a prepararse en cuanto a la adaptación de la ruta y el fortalecimiento de temas como la reintegración política, así como la capacidad institucional para estar preparados (Herrera y González, 2013, p.296).

### **Percepciones de los desmovilizados y empresarios frente al proceso de inclusión laboral**

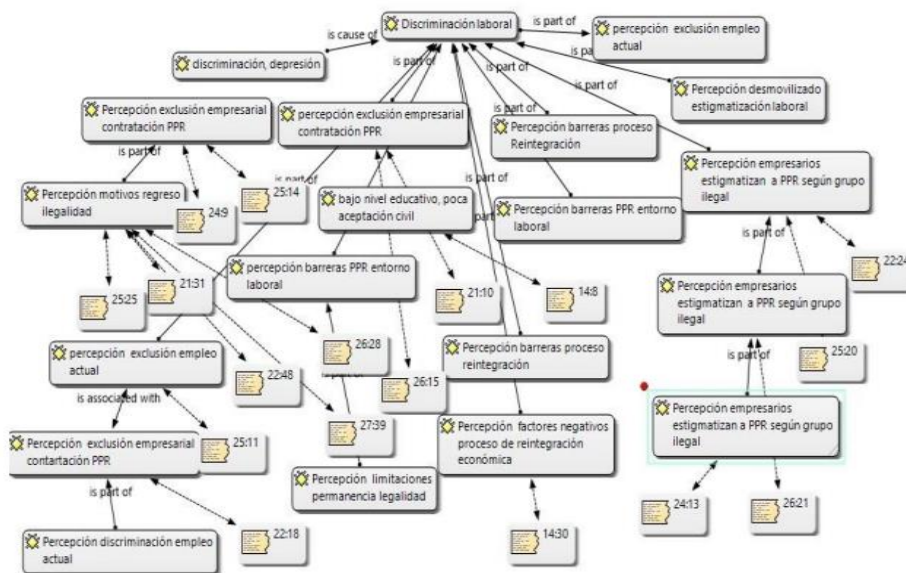


Figura 1. Percepciones de los desmovilizados y empresarios frente al proceso de inclusión laboral

Fuente: Autores

El proceso de inclusión laboral de los desmovilizados, y de forma general todo el proceso de reinserción social de estos, está rodeado de un sinnúmero de imaginarios, prejuicios y estereotipos que condicionan la efectividad de estos.

Por tanto, se hace necesario hablar sobre las diversas percepciones que se tienen de los desmovilizados frente a la inclusión laboral, las cuales originan una fuerte estigmatización social que afecta su inclusión laboral, ya que “hay una clara discriminación en cuanto al acceso y conservación de un trabajo por parte de los desmovilizados. No existe una voluntad social por acogerlos en el curso de su proceso de desmovilización” (Roldán, 2013, p.122).

Los entrevistados manifiestan un alto grado discriminación y prejuicio hacia ellos, por el hecho de haber pertenecido a grupos ilegales, esto dificulta su acceso al empleo. Aunque algunos lograron emplearse, no duraron mucho tiempo en sus puestos de trabajo, pues las funciones que les fueron asignadas se limitaban a

operaciones básicas, sin la posibilidad de ascender dentro de la organización, aunque hubieran demostrado las capacidades necesarias para ello, esta situación originaba en los desmovilizados un sentimiento de inconformidad y malestar que los hacía sentir discriminados. Un entrevistado manifiesta:

“Por el error que cometí, se crea el estigma, entonces qué empresario y qué personajes que están en las empresas van a querer personas que estuvieron equivocadas, ¡ay que secuestraron!, ¡ay que mataron!, no, es muy difícil” (Alexander, 32 años).

Por su parte, los empresarios no son ajenos al prejuicio, ya que se presentan ciertas prevenciones ante la población desmovilizada, puesto que algunos de ellos se sienten inseguros debido a que en algunas ocasiones fueron objeto de delitos por parte de estos grupos, tales como extorsiones, robos o secuestros, por tanto,

La ubicación de empleo para los desmovilizados ha sido uno de los grandes traspies para el

proceso, pues el sector público no ha tenido la capacidad para absorber a esta población y el sector privado ha mostrado grandes reticencias para su contratación. (Alonso y Valencia, 2008, pp.20-21).

Algunos de los entrevistados expresaron grandes dificultades para acceder a un empleo estable a causa de la escasa oferta laboral que brindan las empresas, además reconocen la falta de acompañamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración con relación a su proceso de inclusión laboral, lo que los motivó a encaminar la búsqueda de sustento económico mediante el trabajo independiente e informal, aprovechando el capital semilla que debía ser destinado a proyectos productivos. Sin embargo, algunos de los desmovilizados se vincularon a la ACR como promotores de paz, consiguiendo así contratación por parte del Estado, aunque como los sostiene Alonso y Valencia (2008), el Estado no está en capacidad de absorber toda la demanda laboral procedente de los procesos de desmovilización.

Ahora bien, la Agencia Colombiana para la Reintegración se encarga de sensibilizar a los empresarios a través de promotores que brindan orientación sobre la importancia de emplear a esta población, resaltando la corresponsabilidad como factor decisivo para la construcción de la paz. Esta labor es fundamental teniendo en cuenta la renuencia a la hora de recibirlos dentro sus organizaciones, de esta manera

La inclusión laboral es la principal fuente de sustento económico de las personas en una sociedad, es esta alternativa la que puede conllevar a disminuir las condiciones de pobreza y las desigualdades sociales. Es una opción que toman las empresas, más no una obligación que impone el Estado; es uno de los mecanismos por medio de la legalidad que tienen las PPR para generar ingresos económicos sostenibles a través de un trabajo digno y como un medio para llegar a superar la pobreza extrema. (Caballero y Villa, 2014, p.15).

Sin embargo, los empresarios plantean que el Estado en sus programas de reinserción social no

concede beneficios tributarios que promuevan la vinculación de la población desmovilizada, lo cual genera mayor displicencia por parte de estos para su contratación. Aquellos que se han comprometido con la inclusión de dicha población lo han hecho como aporte personal a la transformación social, en especial en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Aunque se debe tener en cuenta que,

El derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Este conlleva el derecho a obtener un empleo, pero ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. (Sentencia T-014/92, 1992).

De este modo, se observa que la situación de la inclusión laboral de los desmovilizados es un asunto muy complejo, en el cual intervienen por un lado los empresarios, quienes manifiestan que no existen los beneficios por parte del Estado que motiven a la vinculación laboral de estas personas, además expresan su inconformidad frente a la posición del gobierno y su apatía con relación a la conformación de alianzas Estado-Empresa que permitan generar procesos más eficientes e incluyentes para la contratación de la población desmovilizada, por otro lado se encuentra el Estado, quien desde los programas de reinserción social no ha logrado resultado eficientes que respondan a las necesidades reales de esta población, y finalmente la comunidad en general quienes a través de los prejuicios, el estigma y la discriminación han conducido a esta población a situaciones de exclusión social.

Por otra parte, se hace necesario reconocer la labor fundamental que pueden desempeñar en los procesos de inserción laboral de los desmovilizados las pequeñas y medias empresas, ya que estas se encuentran más próximas a la comunidad y por lo tanto no solo servirán como fuente de empleo, sino como un espacio de educación y sensibilización para la reconciliación y la construcción de la paz. Un empresario pone en evidencia esta situación

“Hay empresas muy grandes que hacen acuerdos con el gobierno y les vinculan mucha gente, pero a nosotros las PYMES es poco, ya lo que nosotros hagamos de corazón, porque nos nace, porque queremos poner el terrón de arena, porque nosotros queremos una Colombia en paz” (Alexander, 32 años)

De otro lado, un asunto problemático que se percibe por parte de la población desmovilizada es su situación judicial, ya que sienten temor por los cambios continuos que se presentan en el ámbito jurídico, lo cual podría generar que en cualquier momento pueden ser requeridos por las autoridades, frenando así sus procesos de inclusión social y laboral. Andrés manifiesta tal situación:

Nosotros como desmovilizados tenemos un pasado judicial, que no nos hace competir con otras personas de las empresas, porque, siempre nos va a aparecer: actualmente no es requerido por las autoridades, entonces un empresario va a ver esto, y sabe que, yo tengo un asunto pendiente con la justicia. (Andrés, 30 años).

Por tanto, la inseguridad jurídica de los desmovilizados debe ser resuelta de manera prioritaria por parte del Estado, con la finalidad de asegurar para estos su inserción social efectiva, asunto que también podría afectar el proceso actual de desmovilización y reinserción a la vida civil que se está llevando a cabo con las FARC.

Finalmente, se observa que existen percepciones muy diversas procedentes de los diferentes actores vinculados con los procesos de reinserción social, por parte de los desmovilizados, estos sienten una fuerte discriminación y estigmatización social que limita su integración a la vida civil; los empresarios mantienen cierto recelo para contratar a los desmovilizados debido a su pasado delictivo; mientras que en la comunidad en general se mantienen los sentimientos de temor y desconfianza para acoger a estas personas en la vida cotidiana. Todos estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta en la formulación y diseño de programas de reinserción social para los

desmovilizados, ya que se requieren de intervenciones integrales donde participan todos los actores sociales, que aseguren no solo la desmovilización sino la inclusión y permanencia en la vida civil de estas personas.

### Conclusiones

El proceso de inclusión laboral de la población desmovilizada en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana está acompañado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la cual se encarga de gestionar y realizar un acompañamiento integral sobre el proceso de reintegración económica; al mismo tiempo aplica dos componentes: emprendimiento que está basado en la asignación del capital semilla y el de empleabilidad que tiene como finalidad sensibilizar a los empresarios para que incluyan en sus organizaciones dicha población, después de haber sido capacitada para desempeñar actividades acordes a la oferta laboral.

Sin embargo, los desmovilizados manifiestan su inconformidad respecto al proceso de acompañamiento que lleva a cabo la ACR, aunque consideran que el aspecto psicosocial es eficiente, piensan que la gestión de empleabilidad presenta falencias con relación a la implementación de proyectos productivos. Puesto que la ACR propone procesos de manera individual, mientras que los desmovilizados sugieren que sean colectivos, ya que permitirían una mayor inclusión y lograrían desarrollar sus habilidades personales.

Por su parte, la estigmatización a la que se ven sometidos los desmovilizados se convierte en un factor social y cultural que genera grandes barreras para la reintegración económica y social, siendo un aspecto prioritario a intervenir por parte del Estado colombiano a través de campañas de educación y sensibilización dirigidas a todos los actores sociales. En este sentido, los empresarios deben ser incluidos dentro de estas campañas, ya que como se evidenció en la investigación, estos se tornan renuentes a la hora de contratar a personas desmovilizadas, a causa de la desconfianza y el temor que les ocasiona el pasado en la ilegalidad

de estos. Adicionalmente, desde el gobierno y los empresarios se deben reconocer los limitantes de los desmovilizados para acceder al mercado laboral, entre estos el bajo nivel académico y la ausencia de experiencia profesional, que van a requerir de acciones de capacitación por parte del Estado y de flexibilización por parte de las empresas.

En este mismo sentido, las empresas con apoyo del Estado deberán reconocer y facilitar la adaptación al medio laboral de los desmovilizados, pues las consecuencias psicológicas y sociales producto de su vinculación al conflicto armado de forma directa les impide competir e integrarse en igualdad de condiciones que los demás colombianos que no han sufrido los estragos de la guerra.

Por otra parte, es indispensable que desde el Estado se brinde un entorno social seguro tanto para los desmovilizados como para los colombianos en general, donde existan oportunidades laborales para todos, pero fundamentalmente que se asegure una estabilidad económica a los desmovilizados que no les permita reincidir en actividades ilegales. Ya que como se pudo comprobar en la investigación, algunos carecen de los recursos económicos necesarios para su subsistencia y la de sus familias, viéndose incitados ante la presión que les generan las ofertas económicas de los grupos ilegales que se encuentran en su entorno social.

Es necesario reconocer que pese a las dificultades que han tenido que afrontar estas personas durante su permanencia en la vida civil y teniendo en cuenta que la desmovilización en la mayoría de los casos no fue voluntaria, su forma de pensar y concebir sus proyectos de vida ha cambiado positivamente, prefiriendo estar en la legalidad en lugar de regresar a los grupos armados, priorizando la tranquilidad y el bienestar familiar, sobre otro tipo de cuestiones.

Finalmente, en cuanto a los aspectos institucionales es importante mencionar que el Estado ha sido negligente con relación a su participación en el diseño y aplicación de políticas que permitan una inclusión efectiva de

las personas en proceso de reintegración. Además, se hace evidente una falta de coordinación entre el Estado, la empresa y la sociedad civil que aseguren procesos de inclusión social que respondan a las realidades específicas de las personas desmovilizadas, que involucren el compromiso empresarial dentro del proceso de reconciliación nacional y la construcción de la paz, que aseguren la viabilidad de los procesos de inclusión laboral, pero fundamentalmente que permitan construir nuevos imaginarios y percepciones sobre los desmovilizados y el proceso de reintegración social.

### Referencias bibliográficas

Alonso, M y Valencia, G. (2008). Del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. *Estud. polit., Medellín* [online], n.33, pp.11-34. ISSN 0121-5167

Astrom, S. (2016). Desarme, Desmovilización y Reintegración: retos para el caso colombiano". Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/Relatoria%20DDR.pdf>

Caballero, A, y Villa, C. (2014). Factores determinantes de la Inclusión Laboral: estudio de Caso desde la Perspectiva de las Personas en Proceso de Reintegración. (Monografía). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Castillo, A, y Moreno, A. (2013). La Reintegración Económica de Personas Desmovilizadas de Grupos Armados Ilegales, Como Estrategia de Superación de Vulnerabilidades y Desarrollo de Capacidades. Recuperado de [http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/2239/TEGS\\_CastilloAngie\\_2013.pdf?sequence=1](http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/2239/TEGS_CastilloAngie_2013.pdf?sequence=1)

Centro de Análisis Político – CAP. (2015). Retos de la Seguridad y la Convivencia en un escenario postconflicto en la ciudad de Medellín. Universidad EAFIT. Recuperado de: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/>

pccdesign/SubportaldelCiudadano\_2/PlandeDesarrollo\_0\_1/Noticias/Shared%20Content/Documentos/2015/Retos%20seguridad%20y%20convivencia%20escenario%20posconflicto%20Medell%C3%ADn.pdf

Corte Constitucional. (28 de mayo de 1992) Sentencia T-014/92. [MP Simón Rodríguez Rodríguez]. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-014-92.htm>

Fundación Ideas Para la Paz (2016). Desarme, Desmovilización y Reintegración: Retos para el caso Colombiano [Consulta: 05 mayo. 2017]. Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/Relatoria%20DDR.pdf>

Herrera y González. (2013) Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS). Revista Colombia internacional. Universidad de los Andes. Colombia. Recuperado de: <https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/9130/index.php?id=9130>

Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos. (2013). Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: Una Introducción para Colombia. (1). Recuperado de <http://www.iegap-unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf>

López, F; (1993). La Reinserción Como Construcción De Una Nueva Forma De Relación Social del Foro: "Problemas Y Alternativas Para La Paz En Colombia". Recuperado de <https://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/115/index.php?id=115>

Mejía, L. (2014). La Reintegración Social y Económica de los Grupos Armados Ilegales en

Colombia: Reflexiones a Partir de la Trayectoria de Nueve Excombatientes. Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/La%20reintegraci>

%C3%B3n%20social%20y%20econ%C3%B3mica%20de%20los%20grupos%20armados%20ilegales.pdf

Ministerio del Interior y de Justicia. (19 de julio de 2011). Decreto 2601. Recuperado de: <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Julio/19/dec260119072011.pdf>

Nussio, E (2011). How ex-combatants talk about personal security. Narratives of former paramilitaries in Colombia. Conflict, Security & Development 11 (5): 579-606

Presidencia de la República (07 de septiembre de 2006). Decreto 3043. Recuperado de <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/05/Decreto-3043-del-7-de-Septiembre-de-2006.pdf>

Roldán, L. (2013). La Inclusión Laboral de los Desmovilizados del Conflicto en Colombia: Auténtico Mecanismo Emancipador de la Violencia en Colombia. Recuperado de <http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu:8000/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=03d6bf86-899d-4156-bb12-414b42a41647%40sessionmgr101&vid=6&hid=124>

Redacción el Tiempo. (27 de octubre de 2016). 63 mil personas se han desmovilizado en Colombia. El Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/especiales/cifras-de-desmovilizados-en-colombia-49334>

Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (3554). Recuperado de: <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/Documento%20Conpes%203554%20l%20Pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20reintegraci%C3%B3n%20social%20y%20econ%C3%B3mica%20para%20personas%20y%20grupos%20armados%20ilegales.pdf>

Thorsell, S. (2013). Towards people-centred economic reintegration? an analysis of the economic reintegration strategy of demobilised



combatants in Colombia. Colombia Internacional, (77), 177-215.

Velasco, M., y Londoño, C. (2009). Determinantes Psicosociales De La Permanencia En El Programa De Reintegración Social En Desmovilizados. Revista Iberoamericana De Psicología: Ciencia y Tecnología.

Vélez, F. (2012). Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara: Motivaciones Individuales, Fallas y Vacíos. (Monografía). Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Esquerra. Tesis de Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia.

Torres M. 2010. La Educación Ambiental en Colombia: "Un Contexto de transformación social y un proceso de Participación en Construcción, a la luz del fortalecimiento de la Reflexión - Acción. Programa de Educación Ambiental. Ministerio de Educación Nacional.

Unesco (1986). Retos para una nueva educación ambiental. Chile.

Villadiego, J., Cardona, C., Ortiz, R., Coneo, M. y Ramos, A. La educación ambiental en el departamento de Córdoba: El caso de los proyectos ambientales escolares PRAE.

Villalba Cano, J. (2012), "Propuesta interdisciplinar ambiental para el plan de estudios de la institución educativa Juan de Jesús Narváez Giraldo, en Bogotá". Bogotá. Universidad Javeriana.